

AMPAROS.

Marzo de 1884.

ANTONIO LÓPEZ.

— Juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Hidalgo, por Antonio López, contra la pena de muerte á que fué condenado por la 1.ª Sala del Tribunal Superior del Estado. Con tal sentencia considera el quejoso violados en su persona los arts. 8 y 20 de la Constitución federal.

El Juez de Distrito concedió el amparo y la Suprema Corte confirmó ese fallo.

I. No habiéndoselo notificado al reo la sentencia contra la cual se solicitó este amparo, ¿hubo inexacta aplicación de la ley local y por consiguiente se infringió el art. 14 constitucional?

II. No siendo esa violación la que alegó el quejoso, ¿debió concederse el amparo?

C. Juez de Distrito:

Antonio López fué procesado por la comisión de varios delitos, y sentenciado en primera instancia á la pena capital, de este fallo interpuso el recurso de alzada, y la 2.ª Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tuvo á bien confirmarlo, mandando que se remitiese testimonio de la ejecutoria á la autoridad política para su cumplimiento. Al saber ésto el reo por el Alcaide de la cárcel, segun expresa, y que estaba, por consiguiente á disposicion de la Jefatura del Distrito, ocurrió á la autoridad de vd., solicitando el amparo de la justicia federal, por creeri violadas en su persona las garantías que aseguran los arts. 8 y 20 fracc. 5.ª de la Constitución; toda vez que no se le ha notificado personalmente la sentencia de segunda instancia, con cuya omision se lo ha privado tambien *del derecho de defensa que le concede la ley del Estado para solicitar el recurso de indulto*. Al mismo tiempo pidió la inmediata suspension del acto reclamado, que fué decretada de plano, con fundamento del art. 5.º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Pedimento
fiscal.

La autoridad responsable rindió el informe del caso, insertando la ejecutoria que confirma el fallo del inferior, y agregando que el recurrente *fué defendido en segunda instancia por el procurador ó defensor de pobres, con quien, conforme á derecho se entendieron todas las diligencias incluso la de citacion para sentencia y notificacion de esta.*

El suscrito, evacuando el traslado que se le mandó correr para que expusiera su parecer sobre lo principal, tiene la pena de verificarlo en sentido contrario á las pretensiones del quejoso, por los motivos de que hará mérito á continuacion.

El art. 8.º de la Carta federal garantiza el derecho de peticion, y ordena que á todo lo que se formulare *debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad á quien se haya dirigido, y esta tiene obligacion de hacer conocer el resultado al peticionario.*

Tal garantía no ha sido conculcada en perjuicio del quejoso, por: que al apelar del fallo de 1.ª instancia, en que hace consistir su peticion debe habérsele notificado el auto que recayó, admitiendo la apelacion en ámbos efectos y citándole para la remision de los autos á la Superioridad, de acuerdo con lo preceptuado en los arts. 666 y 673 del Código de procedimientos, en materia criminal. Si, pues, apeló y le fué admitido el recurso, haciéndole saber la admision, como lo asienta él mismo en su escrito de queja, es indudable que no se ha violado en su persona la garantía referida, ni puede sostenerse lo contrario, por falta de notificacion personal del fallo del Superior, en atencion á que, sobre lo que acaba de exponerse, el Código citado, en su art. 414, previene que *ante el Supremo Tribunal defenderá á los acusados el defensor de pobres si aquellos no nombraren, al notificarles la sentencia de primera instancia, persona que lo haga, ó si el nombrado no se presentare oportunamente á la Sala, y en el título 1.º del libro 2.º, donde se demarcan los trámites de todo juicio criminal en la segunda instancia, se ve que en ésta sólo figuran como partes el defensor del acusado y el representante del Ministerio público, á quienes se notifica la sentencia definitiva, sin que sea requisito esencial que la notificacion se haga al procesado en persona.*

Aun siéndolo, no habría violacion del art. 8.º constitucional, como tampoco del 20 fracc. 5.º que dice: *“En todo juicio criminal el acusado tendrá las siguientes garantías: V. Que se le oiga en defensa por sí ó por persona de su confianza, ó por ámbos, segun su voluntad. En caso de no tener quien lo defenda, se le presentará lista de los*

defensores de oficio, para que elija el que, ó los que le convengan.”

Es tan cierto que no se ha conculcado esta garantía en daño del recurrente, que segun se ha indicado arriba, el defensor de oficio le ha patrocinado en segunda instancia. Si él no interpuso el recurso de indulto ó algun otro, su omision no puede invocarse para afirmar que se ha vulnerado la garantía mencionada, que se refiere exclusivamente al juicio criminal, y en el que, como queda dicho, aquel no estuvo privado del derecho de defensa.

En tal virtud, el Promotor concluye pidiendo que, en definitiva, y con apoyo en los arts. 101 y 102 de la Constitucion, el Juzgado se sirva declarar que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Antonio López contra los actos de que se queja.

Pachuca, Diciembre 1.º de 1882.—*Miguel Lara.*

Pachuca, Marzo 22 de 1883.

Sentencia del
Juez
de Distrito

Visto este juicio promovido por Antonio López, preso en la cárcel de esta ciudad y sentenciado á sufrir la pena capital, por la primera Sala del Tribunal Superior de Justicia de este Estado, contra los actos del Jefe político de este Distrito que trata de ejecutar dicha sentencia, con cuyo hecho cree el quejoso que se violan las garantías que otorgan los arts 8.º y final 5.º del 20 de la Constitucion federal, porque habiendo apelado de la sentencia de 1.ª instancia que lo condenó á sufrir la misma pena, no se le notificó la de 2.ª instancia, y con ello se le privó del derecho de solicitar indulto que le otorgan las leyes de este Estado. Visto el informe de la autoridad responsable, las constancias oficiales, que como justificacion de los hechos, se solicitaron y obtuvieron, lo pedido por el Promotor fiscal; y

Considerando, primero: que por las constancias de que se ha hecho mérito aparece que el procesado de que se trata fué juzgado por el Juez 2.º de 1.ª instancia de este Distrito con arreglo á las leyes del Estado, y sentenciado á sufrir la pena capital por varios delitos que ha confesado haber cometido, y entre ellos el de robo con asalto en camino público: que notificada que le fué la sentencia, apeló de ella, y sustanciada y admitida esa apelacion, se remitió la causa al Tribunal Superior, tocando su conocimiento á la 1.ª Sala de ese Tribunal, la que con solo audiencia del defensor de pobres, confirmó la sentencia de 1.ª instancia, y una vez declarada ejecutoriada la remitió para su cumplimiento al Jefe político de este Distrito, y este procedió á ejecutarla.

Considerando, segundo: que por las pruebas de que se ha hecho mérito, aparece que las prevenciones constitucionales en que se fun-

da el amparo, no se han infringido en la sustanciacion del procedimiento desde que se interpuso la apelacion hasta que se pronunció la sentencia de 2.ª instancia, supuesto que el art. 8.º de la Constitucion, sólo exige que á toda peticion recaiga acuerdo por escrito de la autoridad competente y que ese acuerdo se haga saber al peticionario; requisitos todos que se llenaron al concederse la mencionada apelacion, y así consta en el testimonio remitido por el C. Juez 2.º de 1.ª instancia de este Distrito, fs. 18 y siguientes del cuad. de P. y que por ese testimonio y por el informe que rindió la Sala que conoció de la causa en 2.ª instancia fs. 2 del cuad. de P. aparece tambien que con total arreglo á las disposiciones legales vigentes en este Estado que en ellas se citan, las actuaciones de 2.ª instancia se sustanciaron con audiencia del defensor de pobres del mismo Tribunal, por no haber designado el procesado persona que llenara esas funciones, procedimiento que llena tambien los requisitos que establece la frac. 6.ª del art. 20 de la Constitucion, puesto que olla sólo previene que se oiga la defensa de los acusados por sí ó por persona de su confianza y en caso de no tenerla se les presente la lista de los defensores de oficio para que elijan el que les convenga, derecho que no ejercitó el peticionario no obstante que en la forma prevenida por las leyes de este Estado que le son obligatorias, se le hizo saber la remision de la causa al Tribunal Superior, y conforme á esas leyes, en ese acto debió hacer la designacion de defensor.

Considerando, tercero, que si por los datos en que se fundan las anteriores consideraciones, está justificado que así el Juez de 1.ª instancia de este Distrito, como la Sala del Tribunal Superior de Justicia que conoció en 2.ª instancia, arreglaron sus actos á los preceptos de la Constitucion federal, y por lo mismo contra ellos no es procedente el recurso de amparo, aparece tambien que desde la notificacion de la sentencia de 2.ª instancia, quizá por un olvido involuntario de la Secretaría de dicha Sala ó por las multiplicadas ocupaciones frecuentes en los Tribunales, no se siguió la misma conducta, puesto que por la declaracion del defensor de oficio de dicho Tribunal, fs. 1 vta. del cuad. de P. y por el informe que rindió la misma Sala fs. 2 del cuad. de P. que la confirma, se comprueba de una manera indudable que no se notificó al peticionario la sentencia de 2.ª instancia, entendiéndose esta notificacion sólo con el expresado defensor, sin que exista motivo legal ni físico que justifique esa omision; y por el contrario, con ella se infringió el art. 425 del Código de procedimientos criminales vigente en el Estado, que terminantemente previene

que las sentencias que se pronuncien por las Salas del Tribunal se notifiquen al defensor de oficio si éste desempeñó la defensa y á los demás interesados que existan en la Capital del Estado, circunstancia que concurre en el peticionario, puesto que en esta Capital fué juzgado en 1.ª instancia, no hay dato alguno de que de ella se le haya separado, y en la cárcel de esta ciudad se encontraba cuando se trató de ejecutar la sentencia que motiva este amparo, y que la falta de esta notificación lo privó de ejercitar el recurso de indulto, porque esa petición debe hacerse, segun lo dispone el art. 747 del Código de procedimientos citado, en el acto de la notificación de la sentencia que impone la pena capital, y en la falta de esa solicitud se fundó la Sala, fs. 5 vta. del cuad. de P. para declarar ejecutoriada la referida sentencia.

Considerando, cuarto: que la ley de 14 de Diciembre de 1882 en su art. 42 permite á los jueces suplir la ignorancia de la parte agraviada y otorgar el amparo por la garantía cuya violación aparezca comprobada en autos, aunque no se mencione en la demanda, y que en este juicio está plenamente justificado que desde la notificación de la sentencia que motivó el amparo, no se observaron las disposiciones obligatorias que reglamentan estos actos, y la aplicación exacta de la ley está garantida por el art. 14 de la Constitución federal que se ha infringido.

Por estas consideraciones y con fundamento de lo dispuesto en los arts. 101 y 102 de la referida Constitución federal, se resuelve—

Primero: la Justicia de la Union ampara y protege á Antonio López contra los actos de que se queja.

Segundo: hágase saber, publíquese y remítase este juicio á la Suprema Corte de Justicia para los efectos legales. Así definitivamente juzgando lo sentenció el Lic. José Hernandez Carrasco, Juez de Distrito del Estado de Hidalgo, y firmó. Doy fé.—*José Hernandez Carrasco*.—*Vicente Landa*, secretario.

México, Marzo 1.º de 1884.

Ejecutoria

Visto el juicio de amparo que ante el Juez de Distrito de Hidalgo promovió Antonio López contra el Jefe político de Pachuca que trataba de ejecutar en la persona del quejoso la pena de muerte á que fué sentenciado por la 1.ª Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con cuyo hecho crea el promovente que se violan en él las garantías que otorgan los arts. 4.º, fraccion 5.ª del 20 de la Constitución Federal.

Visto el fallo del Juez que concedió el amparo por los siguientes considerandos.

(Aquí se insertaron en la ejecutoria original los considerandos del Juez.)

Considerando, por último: que probada la violación constitucional que amerita la concesión del amparo, no es necesario, por ahora, entrar al exámen de si la ley ha sido aplicada con exactitud, cuya cuestión debe ser materia de posterior resolución.

Por lo expuesto con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución general, se resuelve: que es de confirmarse y se confirma el fallo del inferior que ampara á Antonio López, contra los actos de que se queja.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia para los efectos legales archivándose el tomo.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron:—Presidente. *Guillermo Valle*.—Magistrados.—*Miguel Anza*.—*Manuel Contreras*.—*Francisco Vaca*.—*Fernando J. Corona*.—*Moysés Rojas*.—*Joaquín M. Escoto*.—*Eduardo Ruiz*.—*Enrique Landa*, secretario.

